

# Violencia y destrucción en una periferia urbana

## El caso de Ciudad Juárez, México

Alberto Aziz Nassif\*

El texto pone a prueba la hipótesis de que en las periferias urbanas (enclaves territoriales y sociales degradados, con una marcada desatención pública) existe innovación y creatividad que transforma a las comunidades. Se hace un acercamiento a Ciudad Juárez, en el norte de México. Se desarrolla el argumento de que la construcción de esa ciudad, su modelo económico y sus relaciones sociales, junto con una ausencia del Estado, han generado condiciones y dispositivos para que haya una destrucción social muy lejana de la innovación y la creatividad. La violencia en Ciudad Juárez ha provocado un aplastamiento de la sociedad; sin embargo, hay expresiones valiosas de comunidades organizadas que luchan cotidianamente por rescatar a la ciudad.

*Palabras clave:* periferia urbana, Estado, violencia, sociedad civil, industria maquiladora de exportación, ilegalidad, impunidad, jóvenes, feminicidio.

### *Violence and Destruction in an Urban Periphery: The Case of City of Juarez, Mexico*

This text tests the hypothesis that in urban peripheries (territorial “enclave” and a degraded society, without public attention) exists innovation and creativity that transforms the communities. An approach to city of Juarez is made, a city located in northern Mexico. The argument that is developed suggests that the construction of that city, the economic model, and its social relation, next to the lack of State, have generated conditions and devices for a social destruction very distant from innovation and creativity. Violence in Juarez has caused the crushing of society; nevertheless, there are valuable expressions of organized communities that fight on a daily basis to rescue this city.

*Keywords:* urban periphery, State, violence, civil society, export assembly industry, illegality, impunity, youth, femicide.

---

\* Alberto Aziz Nassif es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México, D. F. Juárez 87, Tlalpan Centro, 14000, México D. F. Tel: 54 87 36 00, ext. 1127. Correo-e: [aziz@ciesas.edu.mx](mailto:aziz@ciesas.edu.mx).

Artículo recibido el 12 de abril de 2011 y aceptado para su publicación el 1 de septiembre de 2011.

## INTRODUCCIÓN

Durante las décadas de 1980 y 1990 la región del norte de México fue un interesante laboratorio sobre movimientos democratizadores en el país. Dos novedades caracterizaban el dinamismo político y económico de ese territorio: la democracia electoral y la industria maquiladora de exportación. Dentro de todo el conjunto, Ciudad Juárez, Chihuahua, fue la expresión más acabada de estos cambios que, en aquel momento, muchos pensamos como una anticipación de lo que pasaría después en otras partes del país.

En unos años la dinámica fronteriza chihuahuense —que había sido un modelo profusamente estudiado como expresión de cambios en el desplazamiento de la industria y en la descolocación de las empresas que buscaron la mano de obra barata para montar el ensamble maquilador— se ha visto asolada por la violencia; una violencia inmisericorde, donde las bandas del narcotráfico sostienen una lucha a muerte. En ningún sitio se ha visto, en forma más contundente, el fracaso de la estrategia del actual gobierno federal.

Estados Unidos no tuvo que ir muy lejos para ver que en su frontera estaba el espacio para establecerse y abaratar costos. Ciudad Juárez tenía una historia particular que giraba en torno a una complementariedad negativa con el poderoso vecino. Desde los años de la prohibición del licor en Estados Unidos, en Ciudad Juárez se instalaron plantas que producían licor; lo que no se podía hacer allá, se hacía de este lado de la frontera. Lo mismo sucedió con el juego, la prostitución y la droga.

La convocatoria del seminario que generó este texto quiere trabajar “periferias urbanas y transformación comunitaria”. Se entiende a las periferias como “aquellos enclaves territoriales y sociales que concentran procesos de degradación, desatención de los poderes públicos y desinterés-marginación del capital privado” (Seminario CIDOB, 2011). La hipótesis es que estos lugares, que se caracterizan por la ausencia institucional y el abandono, son espacios propicios para la “innovación y la creatividad. Es en este tipo de áreas urbanas donde acostumbran producirse las experien-

cias más innovadoras de participación social, innovación cultural y artística, constitutivas de lo que podríamos llamar nueva institucionalidad —alternativa a la dominante— orientada a la promoción de procesos de transformación de la cotidianidad comunitaria” (Seminario CIDOB, 2011).

Lo que pretendo hacer en este trabajo es poner a prueba esta hipótesis; considero que Ciudad Juárez presenta los elementos para investigar qué sucede en una ciudad que ha sido azotada por una guerra que la destruye. Hace un año, una de las voces reconocidas de Ciudad Juárez (Tere Almada) escribió un texto en donde planteaba la situación de la ciudad, el título era “Juárez se nos muere de tristeza” (Almada, 2010). Con datos del Colef y del Instituto Municipal señalaba:

Juárez se nos cae a pedazos, 116 mil viviendas vacías (la cuarta parte de las de la ciudad), se calcula que (entre 2008 y 2009) alrededor de 100 mil juarenses se ha ido a vivir a El Paso, Texas (principalmente los de mayores ingresos económicos), muchos otros han regresado a sus lugares de origen o se han ido a otras ciudades de México. Sólo en la industria maquiladora se han perdido más de 80 mil empleos en estos dos años, producto de la recesión estadounidense; de los que quedan, 20 por ciento se encuentra en paro técnico [...] 10 mil pequeñas y medianas empresas han cerrado producto de la extorsión y las amenazas; más de 600 mil juarenses están hoy en situación de pobreza [...] Se hablaba de la cancelación del espacio público, de alrededor de 7 mil huérfanos y de las viudas de esta guerra, de la soledad con que se vive el horror, de la destrucción de las familias, de las úlceras en niños pequeños y personas que han sido atendidas con inflamación cerebral, producto del estrés máximo, pero sobre todo se hablaba del miedo, un sentimiento permanente en la población juarense.

Los datos pueden variar, por ejemplo, hace unos meses el presidente municipal terminó su periodo y su balance de números catastróficos de sus tres años de gobierno fue: 7 mil muertos, 10 mil huérfanos, 250 mil emigrados, 10 mil negocios cerrados, 30 mil empleos perdidos, 25 mil viviendas abandonadas (*Proceso*, 2010).

Los datos son abrumadores y la pregunta es cómo y por qué se llegó a esta situación. Por supuesto, la pregunta rebasa los límites de este trabajo. Pero, ¿qué ha pasado con la sociedad, con las organizaciones que están frente a un reto gigantesco? ¿Qué ha pasado con la capacidad de organización, con la participación ciudadana, con la vida política? La crisis de Ciudad Juárez, una ciudad destruida por una guerra en contra del narcotráfico y del crimen organizado, es un punto de partida para entender la historia y el contexto, para ver diagnósticos y propuestas y, sobre todo, para revisar las hipótesis del seminario en un espacio límite, porque como me dijo una activista de Ciudad Juárez: “estamos en un lugar donde nadie tiene garantizada la vida”.

En el punto más alto de la crisis de violencia y muerte, con la matanza, a manos del crimen organizado, de 16 jóvenes-niños (14-18 años) en una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar, el 30 de enero de 2010, empezó a desatarse una dinámica social que detonó una transformación en la forma en que la sociedad empezó a mirar el conflicto. El aislamiento empezó a romperse y los términos de interlocución entre la ciudad y el gobierno federal tuvieron que modificarse. En el desarrollo de este trabajo haremos una primera aproximación de lo que pasó antes y después de Salvárcar, como una matanza que detonó cambios importantes en la crisis de Ciudad Juárez.

Los asesinatos no han terminado, tampoco se ha logrado cambiar la estrategia del gobierno federal, pero algo cambió en la sociedad; no se ha ido el miedo, pero se sabe que es vital imaginar que hay un futuro diferente, sobre todo ahora que el consenso es que el modelo maquilador, motor de la economía fronteriza en las dos últimas décadas, está agotado. La distorsionada presencia del Estado es un inductor de violencia, primero con su estrategia de extracción de recursos fiscales y después con su estrategia de guerra contra el narcotráfico.

La violencia, como señala el especialista Michael Wieviorka,<sup>1</sup> ha cambiado, no es un evento espontáneo, sino una compleja construcción social. Hoy en día es un tema de debate público y hay grupos de víctimas

---

<sup>1</sup> Conferencia en El Colegio de México, 22 de octubre de 2010.

por todas partes. Según el autor hay al menos tres formas clásicas o familias en las ciencias sociales para entender la violencia: el sentido común, que ve la violencia como una conducta de crisis, producto de una frustración o agresividad; la segunda es una forma contraria, la violencia como un recurso previamente calculado, es una acción instrumental, dentro o fuera del sistema político, con el fin de conseguir un objetivo, y con la perspectiva de que no es cualquier recurso, porque modifica las cosas; la tercera habla en términos de cultura, la relación entre cultura y violencia, donde el sistema social, la educación, la familia, establecen interacciones para producir violencia.

Según Wieviorka existen otras formas de entender el complejo tema de la violencia, como la mirada que apunta a la dificultad de que un sujeto se transforme en actor, porque existe una pérdida de sentido. En el caso contrario está el uso de la violencia para encontrar un sentido, una recarga de sentido a través de la violencia, como sería el caso de los miles de jóvenes que se enrolan en las pandillas y después en el crimen organizado, en el narcotráfico, como sicarios, porque en su entorno faltan oportunidades, escuela, empleo. En este mismo sentido se puede entender el terrorismo islámico. Por otro lado, está la violencia químicamente pura, por el simple placer de ser violentos; o la violencia como supervivencia, cuando se trata de usarla por cuestiones de vida o muerte.

En este caso consideramos que en Ciudad Juárez se encuentran todos los tipos de violencia referidos, desde las formas clásicas, hasta las que desarrollan los grupos delictivos. Hay violencia calculada, como recarga de sentido y como supervivencia, como veremos en el desarrollo de este trabajo.

Para poner a prueba la hipótesis voy a desarrollar dos argumentos: el primero tiene que ver con la idea de que las violencias se construyen, y lo divido en tres partes: *a)* las características de la crisis de un modelo de ciudad, *b)* la deficiente presencia del Estado y *c)* los esquemas que agravan la crisis de violencia que se vive en Ciudad Juárez. El segundo argumento es entender las respuestas de la sociedad civil organizada frente a esta crisis. Al final establezco algunas conclusiones y perspectivas.

Una hipótesis alternativa que vamos a desarrollar es que la débil presencia del Estado, más el modelo de ciudad y su condición fronteriza, crearon las condiciones para que se construyera una violencia múltiple que ha destruido Ciudad Juárez. La innovación y la creatividad no se han producido. Para fundamentar los argumentos nos basamos en documentos, en reportes de investigación realizada, en entrevistas con informantes clave y en un material que condensa el diagnóstico de un conjunto de organizaciones sociales sobre la ciudad y la violencia.

LAS VIOLENCIAS SE CONSTRUYEN:  
LA CRISIS DE UN MODELO DE CIUDAD

Durante los años noventa Ciudad Juárez cobró relevancia, incluso a nivel internacional, por un acontecimiento infame: desde 1993 continuamente aparecían casos de mujeres asesinadas, cientos de casos, tantos que se hablaba ya de “las muertas de Juárez”. Un fenómeno trágico, que mostró un deterioro importante en el tejido social en torno al modelo maquilador, sobre todo por la masiva contratación de mano de obra femenina y joven. El Estado, por su parte, mostró sus debilidades y un altísimo nivel de impunidad frente a estos feminicidios.<sup>2</sup>

Fue una iniciativa social la que llevó estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una severa sentencia en contra del Estado mexicano en el famoso caso del “campo algodoner”, donde hubo tres mujeres asesinadas. Las organizaciones saben que ganaron el caso, aunque desconfían de la autoridad, como veremos más adelante.

Los feminicidios son una tragedia que no termina, pues los asesinatos de mujeres continúan. Esta violencia focalizada, concentrada en un grupo social específico es, sin embargo, una violencia muy distinta de la que

---

<sup>2</sup>Se trata de un fenómeno de violencia extrema en contra de mujeres jóvenes, la mayoría en un rango de edad de 16 a 20 años, muchas de ellas trabajadoras de la maquila, estudiantes, que son raptadas y sufren agresiones sexuales, las asesinan y después las tiran en lotes baldíos. Los feminicidios en Juárez se contabilizan en 754, entre 1993 y 2009, según datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas (2010). Un fenómeno que con la crisis actual de violencia no ha desaparecido, más bien se ha incrementado de forma exponencial.

se ha desatado hoy en Ciudad Juárez. Hoy toda la población se siente vulnerable, porque hoy Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas del mundo. Ya nadie tiene la vida “garantizada”, a cualquiera lo pueden matar en una esquina o en su auto, a cualquiera lo pueden asaltar, levantar, secuestrar, desaparecer o *rafaguear* con una descarga de arma automática.

En la crisis de un modelo de ciudad están presentes factores que tienen una historia larga, esa historia que le dio a Ciudad Juárez una conformación y una serie de características, como ser frontera con Estados Unidos, tener formas de acumulación a partir de actividades ilegales, como el contrabando, la prostitución y el narcotráfico. Otros factores son más de mediano plazo, como la implantación de un modelo maquilador, donde se debate si se trata de un esquema holístico o de un enclave productivo, en el que el Estado de bienestar ha tenido una presencia débil, frente a un Estado que ha sido extractor de recursos y, últimamente, una presencia represiva. Al día de hoy los factores de la crisis apuntan hacia expresiones de violencia que se incrementan de forma exponencial a partir de 2007, con la estrategia de guerra del gobierno federal.

La crisis de Ciudad Juárez tiene que ver con varios factores: su condición de frontera, la historia de actividades ilegales, las condiciones que impuso a la ciudad el modelo maquilador y la generalización de la violencia con la estrategia de guerra —con operativos militares y de fuerzas federales— que conformaron una tormenta perfecta, que se articuló con factores estructurales, precursores y desencadenantes, en relaciones complejas. Cuando una crisis llega, es porque hay condiciones estructurales y factores desencadenantes. En Ciudad Juárez la debilidad de una frontera que gira en torno a la dinámica que impone el vecino se vio reforzada por una presencia frágil del Estado. Además, su motor económico tuvo varias descomposturas en ciclos de caída y recesión de la economía norteamericana, lo que hizo que las condiciones sociales, de por sí difíciles, se tornaran mucho más cruentas. Finalmente, para terminar el cuadro, una estrategia de guerra sin pies ni cabeza destruye los niveles mínimos de gobernabilidad institucional que había.

La llegada de la industria maquiladora de exportación (IME) transformó de manera radical y apresurada la estructura económica y social de la ciudad. “Las empresas norteamericanas invirtieron sus capitales y desarrollaron la industria del ensamblaje”.<sup>3</sup> Lo que se empezó a generar no tuvo mayor planeación urbana, ni en servicios ni en mano de obra. Se buscó mano de obra barata e intensiva, lo demás fue lo de menos. El análisis del implante maquilador y sus ciclos permite observar el crecimiento explosivo del empleo entre 1979 y 1994. En sólo quince años se pasó de 36 mil empleos a 130 mil, y en los siguientes seis años se dobló hasta alcanzar la cifra de 260 mil empleos. Ninguna ciudad aguanta, por supuesto, estos ritmos de crecimiento, de migración y de servicios urbanos. Se creó una ciudad con graves déficits.

Veamos algunos de sus múltiples déficits: según datos del INEGI para el año 2005, Ciudad Juárez tiene una población urbana de 1 313 338 habitantes; es la quinta ciudad del país. El *boom* maquilador que se registró en varias partes del país, pero de forma ejemplar en Ciudad Juárez, generó un tipo de ciudades vinculadas al mercado global, con crecimientos de población acelerados, con una masa laboral caracterizada por bajos salarios y empleos precarios, con amplios bolsones de pobreza y graves deficiencias en materia de servicios y bienestar, salud, educación y vivienda. Diversos estudios indican que miles de migrantes que llegaron a buscar empleo en la IME, con el fin de obtener mayores ingresos pero con la intención de regresar a sus lugares de origen o de cruzar a Estados Unidos, se quedaron, por lo menos hasta antes de la guerra contra el narco. Estos migrantes formaron esquemas de familia caracterizados por la desatención hacia los hijos, ya sea por no contar con una familia extensa o por no tener acceso a una estancia familiar. Se calcula que si la oferta de estancias infantiles es de 8 mil lugares, la necesidad ronda los 120 mil. El

---

<sup>3</sup>Para ver la velocidad de este desarrollo hay datos que indican que en 1966 había cinco plantas con 760 personas ocupadas; trece años después, en 1979, ya eran 103 plantas con 36 206 personas trabajando en las maquilas (Jusidman y Almada, 2007, 102). Para el año 2000 el empleo generado por la IME superó los 260 mil y a partir de esa fecha empezó a caer; en 2003 había bajado a un poco más de 190 empleos, se recupera los siguientes tres años, de 2004 a 2006, hasta subir a más de 240 mil y luego inicia la caída hasta llegar en 2009 a 171 empleos; una situación similar a la de una década anterior en 1997 (Barraza, 2009).

hecho de que la IME tuviera una contratación masiva de mano de obra femenina generó graves problemas en el entorno familiar. Ahora, como lo estableció el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de Ciudad Juárez, los dos padres trabajan y los niños pasan mucho tiempo solos. Esta situación de abandono se incrementa de generación en generación y el barrio acaba convirtiéndose en el lugar en donde se construyen las identidades y las relaciones (Jusidman y Almada, 2007, 60-61).

Las relaciones laborales son completamente precarias.<sup>4</sup> Los contratos de trabajo que llega a haber son individuales, y las organizaciones gremiales están prácticamente de adorno, pues se trata de cumplir con las exigencias de empresas que no quieren sindicatos en las plantas maquiladoras. Así, entre el sindicalismo subordinado o la ausencia de gremios, las relaciones laborales carecen de la más elemental bilateralidad en términos de la ley. Violaciones como la jornada de trabajo de 48 horas, la contratación de menores de 16 años, los bajos salarios son el pan de todos los días. A manera de comparación: mientras en Estados Unidos el salario llega a 32 dólares por hora, en la IME, el salario es de 88 pesos al día (Jusidman y Almada, 2007, 261-262).

Los ciclos de la IME generan inestabilidad en las condiciones laborales y en la creación de empleo, y en las partes bajas del ciclo se recrudecen las condiciones sociales. Por ejemplo, la última crisis económica (2008-2009) provocó una pérdida de 70 mil empleos, además del establecimiento de contratos para trabajar tres días por semana y los demás sin pago, así como la suspensión de prestaciones, de bonos y de servicios de comedores. A estas condiciones se añaden las graves consecuencias que ha tenido el impacto de la delincuencia, de la extorsión (según datos de la

---

<sup>4</sup> Algunas de las características y consecuencias del modelo maquilador tienen que ver con los siguientes rasgos y sus costos sociales: el empleo maquilador es un trabajo altamente precario que “explota, agota y desecha a los seres humanos a favor de la productividad y los bajos costos” (Jusidman y Almada, 2007, 70-71). Al mismo tiempo, las IME “no contribuyeron al fomento ni a la ampliación del mercado nacional vinculado con el internacional, sino que sirvieron para dar empleo, al inicio, mayormente a un sector de la población femenina joven sin experiencia laboral; no se logró la tan ansiada reconversión industrial que impulsaría el desarrollo industrial hacia adentro; cambió la dinámica de la ciudad con migración del estado y de Coahuila, Durango y Veracruz; la precariedad y los bajos salarios llevaron a una intensificación del trabajo y a la incorporación de más integrantes de la familia a edades tempranas (Jusidman y Almada, 2007, 131-132).

Cámara de Comercio, 80 por ciento de los negocios paga cuotas al crimen organizado por extorsión); ha crecido la economía informal, la pobreza llega hasta el extremo de que en unas franjas de la población se padece hambre, sobre todo en la infancia. Estos resultados han llevado a diversos estudiosos a pensar de que ese modelo maquilador se ha agotado (Barraza, 2009, 52).

Se ha detectado que las consecuencias de este modelo han impactado de forma profunda las estructuras familiares, el modelo

muestra la presencia de múltiples factores de estrés familiar, generadores de violencia. Las familias como construcción social, económica y cultural se han ido transformando por la lógica del trabajo precario, exhaustivo y mayoritario de las mujeres, sin ofrecer alternativas para distribuir funciones tradicionalmente realizadas por ellas (Barraza, 2009, 116).

En el diagnóstico citado se detectaron algunos focos rojos, como la ruptura de las redes familiares, la falta de atención a los hijos, una ausencia de armonización entre empleo y familia, estrés, agotamiento crónico, falta de vínculos, abandono de nuevas generaciones, empobrecimiento de las familias, deterioro de los imaginarios y del sentido de pertenencia, frustración, enojo, violencia cotidiana (Barraza, 2009, 117).

Ciudad Juárez tiene una enorme segmentación urbana, a tal grado que se considera que hay tres ciudades diferentes: La del norte, el primer mundo, con toda la infraestructura y el equipamiento urbano. La ciudad del poniente, históricamente la zona pobre en donde hay graves carencias de infraestructura, de servicios educativos y de salud; es la zona donde no hay ni pavimento, porque Ciudad Juárez es una de las ciudades con mayor déficit de pavimentación, se calcula que 50 por ciento de la ciudad no está pavimentada. Y la tercera ciudad es la del sur oriente, que se ha creado más recientemente y en donde conviven fraccionamientos residenciales con amplias zonas de vivienda de interés social (Barraza, 2009, 151).

Hay focos rojos en el desarrollo urbano de la ciudad, porque Ciudad Juárez se ha planeado de acuerdo con los intereses particulares de los

desarrolladores. Esto sucede quizá también en otras ciudades de México, pero en esta frontera se ha agravado por la singularidad de su explosión laboral. La lógica de la ciudad es complicada hasta para moverse en ella; el transporte público es deficiente y caro. Existe una falta de espacios de esparcimiento para jóvenes y muchas veces los pocos espacios que hay están en manos de pandillas porque la seguridad pública no es eficiente. Ciudad Juárez experimenta con la crisis económica y la grave violencia un despoblamiento que ha dejado miles de viviendas abandonadas, aunque algunas de ellas han empezado a ser recuperadas por grupos sociales para hacerlas bibliotecas de colonia o de barrio (Barraza, 2009, 156).

La parte social es la expresión de la carencia de un Estado en una ciudad con severos déficits. El rezago en materia de estancias infantiles fue una preocupación de diversas organizaciones sociales que iniciaron un trabajo con las instituciones de seguridad social del Estado, el IMSS y el ISSSTE, para empezar a solucionar el problema. En materia educativa hay un enorme rezago en los niveles de preescolar, secundaria y educación media superior. En salud sucede una situación muy particular, si se contrastan las cuotas obrero-patronales recibidas por el IMSS en Ciudad Juárez con los gastos operativos y de inversión, se obtiene una desproporción muy alta, porque hay “un porcentaje significativo de cuotas que no están siendo invertidas en el municipio y una inversión en obra pública severamente deficiente y decreciente” (Jusidman y Almada, 2007, 228-229).

El debate sobre el agotamiento del modelo maquilador es una constante en los diagnósticos sobre la ciudad. Se dice que la maquila forma un esquema holístico que ayuda a corregir las deficiencias del Estado. Por ejemplo, el trabajador se mueve en el transporte de la empresa, porque el transporte público es muy deficiente; una o dos comidas las hace en la planta; puede terminar sus estudios de primaria o secundaria; los médicos de la empresa atienden los problemas de salud. De esta forma, cuando los ciclos a la baja de las crisis económicas recortan empleo o días de trabajo, la afectación es mucho más grave que en otros contextos urbanos en donde hay servicios públicos y una presencia estatal más fuerte.

## LAS ESTRATEGIAS DEL ESTADO: ILEGALIDAD, IMPUNIDAD Y COMPLICIDAD

Las condiciones urbanas, laborales y sociales tienen su contraparte en el fenómeno delictivo y en la incapacidad del Estado para responder ante el desafío de la violencia que destruye Ciudad Juárez.

Para entender las condiciones en las que se construyó la violencia del narcotráfico y su vinculación con los anclajes delincuenciales de niños y jóvenes, hay que analizar lo que sucedió con el consumo y el tráfico de drogas. En diversos estudios y grupos de enfoque se presentó el tema de la transformación del narcotráfico y de su vinculación con los operadores. Se trata de un problema muy complejo que puede abordarse desde diferentes miradores. En este caso señalaremos la manera en que los cambios del narcotráfico impactaron en la ciudad, bajo el supuesto de que ya había una estructura urbana que operó como precursora del narco y de la violencia.

El narcotráfico ha establecido su poder y dominio sin objeción de nadie en la ciudad, de hecho se ha convertido en un Estado paralelo, con sus propias reglas y sanciones y ha utilizado la violencia como instrumento de poder y como método de control (Barraza, 2009, 227).

El peso de las actividades ilegales lleva al historiador Carlos González a señalar que se trata de

una especie de práctica histórica muy ensayada para movernos por la frontera de lo ilegal. A principios del siglo xx, el alcohol, aunque ya se movía bastante droga y el tráfico de armas, son algunos de los productos que se pasaban por esta ciudad, lo único que hace distintos esos tiempos del actual es el cálculo estratégico que hicieron las bandas del crimen organizado sobre nuestra región, esa es la parte que inició este proceso brutal de violencia (Barraza, 2009, 229).

Pero, quizás hay otros elementos que se pueden agregar, además del cálculo que es uno de los resultados de la violencia, como señalaba Wiewiorka.

Hay diversas explicaciones sobre lo que ha destapado el estallamiento de la violencia que se empezó a generar con la declaración de guerra del gobierno de Felipe Calderón en contra del narcotráfico al inicio del sexenio, el 11 de diciembre de 2006. Una de ellas habla de los cambios internos de las rutas y los mercados. Incluso la versión oficial, que repite el gobierno día a día, es que la situación ha cambiado porque México dejó de ser de forma mayoritaria un lugar de tránsito, para convertirse también en un espacio de consumo. Remitimos a los trabajos especializados de Astorga (2005), Flores (2009) y Azaola (2008), entre muchos otros, que discuten las tesis del gobierno, los problemas de la inseguridad, del narcotráfico, de las policías y de la violación de los derechos humanos, y destacamos que no pretendemos hacer un estudio del narcotráfico y sus causas, sino simplemente establecer por qué razón se dio la estrategia y cómo ha afectado a Ciudad Juárez y a otras muchas ciudades del país.

Otra de las tesis del gobierno es que el consumo se ha elevado de forma considerable. Dos autores rebaten paso a paso las estrategias y los discursos del gobierno señalando que la justificación de la llamada guerra en contra del narco es falsa; llegan a la conclusión de que “los argumentos esgrimidos para explicar/justificar/defender su decisión, es que la razón primordial de la declaración de guerra [...] fue política: lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas” (Aguilar y Castañeda, 2009, 13). En este texto se muestra que el consumo de drogas no ha variado significativamente, aunque en algunos lugares sí ha aumentado; también se menciona que la infiltración policiaca del crimen no es algo nuevo, incluso se llega a plantear que las estrategias de combate al narco de los últimos tres gobiernos en México (Zedillo, Fox y Calderón) han sido similares; lo que ha variado es la intensidad que, desde el punto de vista de los daños colaterales, ha producido el incremento de la violencia y la destrucción de ciudades como Ciudad Juárez, que es sin duda la más afectada por esta *guerra fallida*.

La grave paradoja es que los enfoques sobre la guerra al narco en México y Estados Unidos son opuestos, según Aguilar y Castañeda:

A las autoridades mexicanas les debe quedar claro que el gobierno de Estados Unidos siempre le dará “palmaditas” (como lo que acaba de hacer Hilary Clinton en la visita a México a finales de enero de 2011, donde apoyó a Calderón y a su estrategia), pero que nunca asumirá la corresponsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, por tres razones. Primero, no están dispuestos a pagar el costo de llevar la “guerra” al interior de su país, sobre todo si alguien lo quiere hacer por ellos. Segundo, disponen de evidencias para comprobar que el enfoque punitivo (dominante en México y en Juárez desde diciembre de 2006) está destinado al fracaso. En tercer término, piensan que el problema de las drogas debe ser tratado como un asunto de salud pública que implica algún tipo de legalización (Aguilar y Castañeda, 2009, 101).

En la serie de televisión de HBO, *The Wire* (*La escucha*), que se desarrolla en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, se puede observar y entender cómo funciona el narcotráfico en ese país, qué pasa con el narcomenudeo, con los capos que controlan la droga en la ciudad; cómo la obtienen y qué redes tejen. Por otro lado, cómo funcionan las instituciones de administración y procuración de justicia, qué papel desempeñan los políticos, el alcalde y los jefes policiacos, y cuál es el desempeño de la prensa. También se puede ver lo que pasa con los personajes del bajo mundo de la droga, qué tipo de personas se construyen en la pobreza y la violencia, cómo es su interacción cotidiana con la policía, el tipo de escuelas a las que asisten, cómo son las relaciones familiares de policías y narcotraficantes. En fin, según esa serie, de manufactura bastante sobria y realista —contraria a la estética hollywoodense—, en Baltimore habría todo lo que puede haber en una ciudad como Ciudad Juárez, pero no hay una guerra, a pesar de que el índice de homicidios es muy alto, y eso hace toda la diferencia.

La guerra que emprendió Felipe Calderón y que hoy niega que alguna vez la haya llamado así, ha encendido focos rojos en muchas ciudades del país, porque los daños colaterales han ido creciendo de forma espectacular. Hasta en los estudios que quisieron demostrar que en México la

violencia, medida por el número de asesinatos por cada 100 mil habitantes, no registraba un aumento significativo, han señalado que a partir de 2009 la violencia crece, principalmente en el estado de Chihuahua y, de manera concentrada, en Ciudad Juárez.<sup>5</sup>

El gobierno federal ha puesto en marcha diversas estrategias específicas para Ciudad Juárez y todas han fallado. Según el recuento que hace el diario *Reforma*, Ciudad Juárez registró 83 víctimas del crimen organizado en 2007, al siguiente año la cifra fue de 1 129 víctimas, en 2009 subió a 1 462, y para 2010 se llegó a 2 377; otros señalan la cifra de 3 185 ejecuciones durante el año pasado. Con cada estrategia la violencia aumenta, así la primera fue el operativo Conjunto Chihuahua, el 27 de marzo de 2008, que consistió en el envío de militares para el patrullaje. Fue tan alto el costo de las violaciones a los derechos humanos, que a principios de 2010 se decidió un nuevo plan que sustituyó a los militares por elementos de la policía federal; unos días después sucedió la tragedia de Salvárcar y entonces llegó el plan “Todos Somos Juárez”, un paquete de medidas de seguridad, salud, educación y cultura. Para finales de enero de 2011 se empezó a elaborar un nuevo plan, la formación de un nuevo modelo policiaco (*Reforma*, 28/I/2011). Ahora, la nueva estrategia consiste en ensayar un modelo de policía, otro más.<sup>6</sup>

Es lamentable el nivel de desacuerdos y de resultados de las autoridades. Por ejemplo, al cambiar el gobierno en octubre de 2010, la ex procuradora del estado (Patricia González) y el presidente municipal saliente de Ciudad Juárez (Reyes Ferriz) ventilaron en la prensa sus diferencias. Cabe aclarar que ambos pertenecían a gobiernos del mismo partido, el PRI. En su debate, que puede resultar un alegato para justificarse

<sup>5</sup>Véase Gobierno Federal (2010). Las cifras de muertos del sexenio llegaron en enero de 2011 a más de 35 mil. Con datos sistematizados hasta mediados de 2010, el gobierno federal estableció que había 28 353 homicidios asociados a la delincuencia organizada, de los cuales 8 334 fueron de Chihuahua, es decir, casi 30 por ciento.

<sup>6</sup>La estrategia consiste en poner en marcha un “nuevo modelo de Policía Única con la creación de dos módulos de 422 agentes cada uno que apoyen la acción de la policía federal a nivel estatal y municipal dando prioridad a tareas de inteligencia [...] Una policía profesional, de investigación, táctica y que venga a reforzar las corporaciones estatales” (*Reforma*, 29/I/2011).

de sus errores, omisiones y fracasos, dejan ver el nivel de penetración del crimen organizado en las policías; el enorme caudal de impunidad que ha dejado a la justicia completamente anulada; la contaminación y el traslape entre los cuerpos policiacos y los cárteles de la droga (Dávila, 2010). Así, es evidente que las estrategias militares y policiacas han fracasado, si se miden por los resultados, como lo muestra, por ejemplo, el incremento exponencial en los índices de violencia y el aumento de los asesinatos que han convertido a Ciudad Juárez en la ciudad más violenta del país.

En un estudio reciente se muestra el comportamiento de la violencia y los asesinatos en dos ciclos, uno en donde disminuyen, que va de 2000 a 2007, es decir, al inicio de la guerra de Calderón, y otro de 2008 a 2009, con un incremento exponencial, que se agudiza en 2010. Se trata de una tendencia que, supuestamente, se concentra en unos cuantos estados en los que se dispara el índice de violencia que en el promedio nacional llega a 18 asesinatos por cada 100 mil habitantes: Nayarit (20.1), Sonora (22.8), Michoacán (23.6), Baja California (48.3), Sinaloa (5.3), Guerrero (59.0), Durango (66.6) y Chihuahua (108.5). Esto dibuja la geografía del narcotráfico y de los cárteles en el país. Hay una asociación entre los incrementos de la violencia y la estrategia de los operativos conjuntos en donde han intervenido las fuerzas armadas. La explicación apuntaría a que el aumento de la violencia tiene que ver con una crisis del orden local, con el desmantelamiento de las policías municipales y con el cambio de lo que Fernando Escalante llama “el viejo sistema de intermediación política del país”

[que] se basaba en la negociación del incumplimiento selectivo de la ley [...] Así funcionaba la producción, el comercio, las relaciones laborales, así funcionaba el contrabando y el resto de los mercados informales e ilegales, así funcionaba el país. Y en la medida en que funcionaba bien resultaba invisible la violencia que había detrás, pero es obvio que esa negociación de la ilegalidad llevaba implícita siempre la amenaza del uso de la fuerza (Escalante, 2011).

El plan “Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad”, fue una innovación ante los ineficientes planes de intervención militar y policiaca. En esta ocasión se trató de la estrategia que llegó como resultado de la matanza de Jóvenes en Villas de Salvárcar, la gota que derramó el vaso en Ciudad Juárez, a finales de enero de 2010. Unos cuantos días después el gobierno federal montó un foro para escuchar las voces de Ciudad Juárez y poner en marcha un operativo de políticas públicas en materia de seguridad, economía, empleo, salud, educación, cultura y deporte, y desarrollo social, con un total de 160 acciones y un presupuesto de 3,385.5 millones de pesos. Este plan, a diferencia de otros muchos, se elaboró en mesas de diálogo y de trabajo con representantes de la sociedad y con organizaciones sociales, empresariales, académicas, y su objetivo fue establecer un programa de políticas públicas. Se establecieron compromisos específicos con metas y con fechas para su conclusión; y en la página Web de la Presidencia de la República se anotaron los avances; el último reporte de avances tenía la fecha de 11 de octubre de 2010. Este fondo de inversión pública fue una catarata de obras y proyectos, de escuelas, clínicas, parques, bibliotecas, mecanismos de seguridad, formas de empleo, etc. Las críticas han sido muchas y variadas, desde las que ven el problema de la fragmentación social, la falta de una estrategia global, los impactos limitados, hasta la falta de resultados en la violación de derechos humanos y en no atacar de fondo los problemas profundos de la violencia.<sup>7</sup>

Por otro lado, hay acusaciones de que el plan fue un regalo para ciertos grupos de empresarios constructores o del ramo hotelero. El plan está lejos de servir para construir mecanismos que regeneren el tejido social. Se habla de inversiones de cemento sin ningún contenido social. En palabras de una activista: “Todos los adolescentes que participan en pandillas o que están en riesgo de vincularse al narcotráfico o a la delincuencia requieren otro tipo de estrategia de intervención, no porque se

---

<sup>7</sup> Como ejemplo podemos mencionar que a mediados del mes de enero de 2011, en uno de los parques en donde se ubicó un espacio deportivo, siete jóvenes que estaban jugando fútbol a plena luz del día perdieron la vida en una matanza.

pongan ahora escuelas van a venir a las aulas”. Este punto es central porque 30 por ciento de los adolescentes de 12 a 15 años está fuera del sistema escolar; mientras el índice de jóvenes de 15 a 19 años llega a 31 por ciento (*Proceso*, núm. 1786, 23/1/2011). Estos jóvenes son los llamados “ninis”, porque ni estudian ni trabajan, y se calcula que en el país hay alrededor de siete millones de jóvenes en estas condiciones. Por supuesto, en Ciudad Juárez y en otras ciudades estos grupos son carne de cañón para el narco y el crimen organizado.

Otra evaluación sobre el plan indica que:

La intervención social trae algo de inversión, obra pública que hay que valorar, pero no van al fondo de la cuestión: si no atienden la corrupción ni la construcción de sistemas de justicia eficaces ni bajan la inseguridad ni abren el gobierno a la participación ciudadana, a la rendición de cuentas ni se fincan responsabilidades legales a los servidores públicos incumplidos, no vamos a cambiar las cosas (*Proceso*, núm. 1784, 9/1/2011).

Con ello se aprecia que puede haber obra social e inversión, pero mientras falten los factores para la cohesión social, que tienen que ver con un nuevo modelo de desarrollo regional, con instituciones de justicia y con una autoridad garante de los derechos ciudadanos, no habrá una disminución de la violencia.

#### LOS VÍNCULOS PERVERSOS: LAS OPORTUNIDADES PARA LA VIOLENCIA

Las estrategias estatales en contra del crimen organizado no han podido establecer una base mínima de impartición de justicia. La presencia de la policía federal no es apreciada por los ciudadanos y, paradójicamente, se sigue valorando más al ejército, se le tiene mayor confianza.

El clima de opinión ciudadana en Ciudad Juárez es de completa desconfianza, tres de cada cuatro personas no confían en que la nueva estrategia contra la inseguridad, anunciada a finales de enero de 2011, vaya a resolver el problema; 76 por ciento dijo que no confía en que mejore la

seguridad con el plan de crear una policía; 68 por ciento considera que en el último año la seguridad ha empeorado, y 80 por ciento señala que no se siente seguro en la ciudad, por ello 64 por ciento afirmó que si tuviera la oportunidad de irse lo haría. En cuanto a las corporaciones, 73 por ciento rechaza la presencia de la policía federal, y 67 por ciento apoya la presencia del ejército, este último dato cambió, porque en febrero de 2010, un año antes, el apoyo a los militares era de 46 por ciento. La desconfianza en la policía municipal es de 72 por ciento, en la estatal es de 75 por ciento, pero en la federal es de 83 por ciento; en cambio, en el ejército baja a 43 por ciento. La visión sobre la responsabilidad apunta hacia el gobierno federal; 37 por ciento considera que el responsable de combatir la inseguridad en Ciudad Juárez es el presidente de la república; en cambio, sólo 9 por ciento mira al presidente municipal, y 3 por ciento, al gobernador del estado, aunque 43 por ciento los responsabiliza a todos (*Reforma*, 30/I/2011).

En diversas entrevistas se afirma que las corporaciones de la policía municipal en Ciudad Juárez están completamente penetradas por el crimen organizado y, como se ve en los datos anteriores, las corporaciones de la policía estatal generan mucha desconfianza al ciudadano juarense. Sin tener una evidencia contundente, varios de los entrevistados no dudan en afirmar que hay vínculos entre la policía municipal de la ciudad y el cártel de Juárez, un grupo delictivo que se denomina La Línea.<sup>8</sup>

El pacto de complicidad —tú autoridad no te metas conmigo (delincuencia), y yo no me meto contigo (autoridad y sociedad)— que funcionó durante décadas se ha roto. Ciudad Juárez es el ejemplo más dramático de las implicaciones de haber cambiado las estrategias sin tener los recursos para el remplazo. Cualquier estrategia de combate al crimen organizado resulta muy complicada cuando las corporaciones de la policía local y estatal están coludidas con el crimen organizado, como suce-

---

<sup>8</sup> Este grupo delictivo está en guerra con el cártel de Sinaloa, cuya cabeza es el Chapo Guzmán. Un personaje muy famoso tanto por haberse fugado de la prisión de Puente Grande, Jalisco, hace una década, como por haber figurado en la lista de multimillonarios de la revista *Forbes* en 2009, en el lugar número 41.

de en este caso. Al mismo tiempo, es muy difícil para la sociedad organizada establecer estrategias de contrapeso y de presencia ciudadana, cuando la autoridad gubernamental no presenta un frente unificado y cuando no existe una línea divisoria clara entre el Estado de derecho y la delincuencia organizada.

Una de las consecuencias del vínculo perverso entre autoridades y crimen es la explosión de la violencia que refuerza la impunidad. Hay un estudio que explica de forma interesante un encadenamiento de efectos que sirven para explicar el caso de Ciudad Juárez. Los efectos detonantes de la violencia son, de acuerdo con Eduardo Guerrero Gutiérrez, los siguientes: 1) *El efecto de combustión* que se generó como resultado de arrestos de capos, de reestructuración de cárteles, de intentos de desplazar a ciertos grupos de la frontera de Ciudad Juárez, la ruta de paso de las drogas. El resultado fue el enfrentamiento mortal entre los grupos: el Cártel de Juárez *vs* el Cártel de Sinaloa. 2) *El efecto de amplificación*: la contratación de sicarios por parte de los cárteles, un reclutamiento masivo de jóvenes de las pandillas de Ciudad Juárez, que son armados por los cárteles. 3) *El efecto de escalamiento*: el aumento de la violencia y de los asesinatos que se multiplican en la ciudad a partir de 2007-2008, debido a que el Estado se ve rebasado y no tiene la capacidad para detener, prevenir, detectar e investigar el fenómeno. 4) *El efecto de una violencia que se derrama*: la violencia produce siempre más violencia. En cada bando se incorporan más bandas y pandillas. Los descabezamientos y matanzas producen la fragmentación de los grupos y la expansión de la violencia, los delitos y las ejecuciones (Guerrero, 2010).

De acuerdo con Eduardo Guerrero, cada uno de estos efectos se pudo haber evitado, ya sea con trabajo de inteligencia, con programas sociales, con una policía profesional, pero ninguna de estas medidas se llevó a cabo. Igualmente, el autor señala que hay una serie de consecuencias importantes, otros factores, que se ubican como detonadores de la crisis de Ciudad Juárez y que hemos tratado de perfilar como las condiciones sociales que permiten la construcción de la violencia en esa ciudad fronteriza: 1) *El efecto de ubicación*, la geografía de un municipio por donde

se cruza la droga a Estados Unidos, primer consumidor mundial. La ciudad vecina de El Paso, Texas, es un punto estratégico para la distribución de drogas. 2) Los *déficits sociales* de pobreza y exclusión y los altos niveles de consumo de drogas, de prostitución; el rezago educativo, que se calcula en unos 120 mil niños-jóvenes de entre 13 y 24 años fuera del sistema escolar. 3) Un *mal desarrollo urbano* que ha producido la segregación de múltiples zonas de la ciudad; hay colonias sin servicios mínimos, sin escuelas, sin áreas de esparcimiento y sin equipamiento; además, se calcula que la mitad de la ciudad no está pavimentada. 4) La presencia masiva de pandillas de jóvenes en la ciudad. Sin contar con un censo, se calcula que existen unas 500 *pandillas* y se establecen aproximaciones de unos 15 a 25 mil miembros; se considera que 30 de estas pandillas tienen un alto nivel de peligrosidad, ya sea por su vinculación con los cárteles y/o por su carácter binacional y su relación con pandillas de Estados Unidos. 5) La *ineficiencia y la colusión de las autoridades*, que en lugar de contener a esos grupos, simplemente les dan todo el espacio para que se desplieguen en la ciudad (Guerreo, 2010).<sup>9</sup>

De todo este complicado proceso social y de la crisis de violencia, surge ahora en Ciudad Juárez, junto al “feminicidio”, lo que algunos llaman el fenómeno del “juenicidio”, haciendo referencia a un grupo de edad. El mundo juvenil del país tiene características que lo hacen carne de cañón de la violencia y el narcotráfico. Lo grave del problema es que la especificidad de Ciudad Juárez no es tan singular, sino que se trata de condiciones que se pueden generalizar, como de hecho ha empezado a suceder en otras ciudades que no tenían ni los antecedentes, ni la problemática fronteriza de Ciudad Juárez, como sucede en los estados de Michoacán, Aguascalientes, Nuevo León, en ciudades como Monterrey, Cancún, Acapulco, Cuernavaca o Torreón.

---

<sup>9</sup> También se pueden consultar otras fuentes sobre las pandillas que indican que hay unas 460, pero que existen cuatro que son particularmente violentas y que están estrechamente vinculadas con el crimen organizado: los Aztecas, Pura Raza Mexicana, aliadas al Cártel de Juárez y su brazo armado, La Línea; los Artistas Asesinos y los Mexicles, como socios del Cártel de Sinaloa (Barraza, 2009, 309 y ss).

La mitad de los jóvenes mexicanos, aproximadamente, vive bajo la línea de pobreza y alrededor de 220 mil emigraron cada año a Estados Unidos entre 2000 y 2006. Según estadísticas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, zona norte, la guerra entre bandas de narcotraficantes en Juárez ha dejado de 2008 a la fecha más de 4 500 víctimas, de las que 30 por ciento son menores de 20 años. Si se cuentan los menores de 30, resulta que desde el inicio del presente sexenio los jóvenes han puesto más de la mitad de los muertos por violencia (Domínguez, 2010).

Con estas cifras, algunos analistas consideran que la estrategia en contra del crimen organizado es un fracaso triple, pues el fenómeno del juvenicidio se suma al fracaso estructural de la política estatal hacia los jóvenes y al fracaso histórico de un modelo económico y social, que cada año expulsa o le cierra el paso a un millón 200 mil jóvenes que llegan al mercado de trabajo y no encuentran ninguna posibilidad.

Los jóvenes que ahora delinquen son los hijos de los ajustes estructurales, del neoliberalismo, del Estado mínimo [...] Por eso la emigración forzada, el suicidio o la sicariada son las únicas opciones. “¿Por qué le vamos a tener miedo a la muerte si ya nacimos muertos?”, decía un joven pandillero en Ciudad Juárez (Quintana, 2010).

#### LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: MIRADAS, PROPUESTAS Y ACCIONES

Después de este recorrido de factores estructurales y dinámicas sociales que desencadenan y construyen la crisis de violencia en Ciudad Juárez, ahora veremos qué ha pasado con la sociedad organizada, con las respuestas y con las acciones, sus miradas y evaluaciones de lo que sucede en esta martirizada frontera. La gente vive con miedo, cambia sus rutinas, se cuida, porque su vida puede estar en peligro en cualquier esquina, porque en un semáforo se puede jugar su seguridad, frente al asalto a mano armada; porque a su negocio, a cualquier res-

taurante, llegan las bandas del crimen a pedir sus cuotas, a extorsionar, a cobrar derecho de piso, incluso esta práctica está presente hasta en las escuelas, como en los mejores tiempos de cualquier mafia que controla un territorio.

Algunos juarenses nos confirman que todavía no hay pérdida del territorio, es decir, zonas controladas por las bandas del crimen, como sucede en algunas ciudades de Tamaulipas, en donde a través de retenes hay control de la circulación. En Ciudad Juárez los retenes son de las autoridades. Pero la extorsión es una forma de control criminal que ya ha afectado por lo menos a unos 10 mil negocios que han cerrado o que incluso han sido incendiados, porque sus propietarios no tuvieron el dinero para pagar las cuotas. Algunos propietarios han sido secuestrados y otros, que no han estado dispuestos a seguir las reglas impuestas por el crimen, han emigrado hacia la vecina ciudad de El Paso, Texas, una de las más seguras de Estados Unidos.

Frente a una destrucción urbana como la que ha sufrido Ciudad Juárez, resulta complicado para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tener una respuesta contundente. Sin embargo, hay una dinámica de las organizaciones que frente a la crisis han empezado a actuar a pesar de todo. En la ruta de reconocimiento de lo que ha sucedido con las OSC hay momentos y tiempos, acontecimientos y valoraciones, acciones y perspectivas. Antes de la crisis de violencia la participación de las OSC fue muy relevante en la lucha en contra de los feminicidios.

Los logros significativos de las organizaciones de la sociedad en cuanto a diseño y aplicación de metodologías de intervención permitieron entender los problemas de violencias en contra de las mujeres, drogadicción, educación formal e informal, trabajo con las personas con capacidades diferentes, seguridad en la comunidad, las personas infectadas con VIH (Barraza, 2009, 303).

En el cuadro 1 se pueden apreciar los temas en los que han intervenido las OSC y sus principales logros:

## CUADRO 1. Logros significativos de las OSC en Ciudad Juárez

<i>Tema</i>	<i>Logros</i>
Derechos humanos	-Metodologías que permitieron entender y tratar problemas de violencia, VIH, drogadicción, educación formal. -Cuestionamiento de la persecución del delito, como la represión y la tortura. -Posicionamiento del tema de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
Justicia social	-Posicionamiento del tema de la pobreza en Ciudad Juárez en la agenda pública. -Cuestionamiento del modelo maquilador en Ciudad Juárez.
Derechos laborales	-Evidencia de violación de los derechos laborales en la maquiladora. -Acompañamiento y asesoría en sus problemas laborales.
Democratización	-Cuestionamiento a las prácticas priístas que se gestaban en la ciudad. -Construcción de actores sociales. -Construcción de líderes distintos a las dinámicas priístas. -Construcción de movimientos ciudadanos y apertura de espacios públicos.

*Fuente:* Castillo (2009, 304).

Las perspectivas de acción de las OSC juarenses podrían ser bastante similares a las de otras ciudades, por lo que conviene establecer algunos cortes temporales que han transformado la intervención social en la ciudad. Entre los años 2002 y 2006 hay una participación social que se concentra en temas como los feminicidios y los problemas de caída del empleo maquilador por la recesión en Estados Unidos. A partir de 2007, cuando se inicia el sexenio de la guerra en contra del narcotráfico, se registran cambios en la intensidad de la violencia y, a partir de 2008, se empieza a reconocer la complejidad del problema de lo que estaba pasando, aunque no se logra establecer una base común, sino hasta 2010, con la tragedia de Villas de Salvárcar, acontecimiento que marca un cambio en la dinámica de las OSC y en las formas de interlocución entre la sociedad organizada y el gobierno federal.

Antes de la tragedia de Salvárcar hay una serie de asesinatos que marcan a la ciudad y establecen un clima de sensibilización. Los llamados

daños colaterales de la estrategia gubernamental de guerra estaban llegando a la sociedad y a integrantes visibles de la comunidad. En noviembre de 2008 asesinan al periodista Armando Rodríguez, “El Choco”, que escribía sobre temas de delincuencia organizada y narcotráfico. En diciembre de ese año asesinan al maestro más antiguo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Gerardo González; muy pronto se sabe que hubo una confusión en el blanco, como sucedió con los jóvenes de Salvárcar, unos meses después. En medio de este clima de violencia creciente hay grupos de universitarios que empiezan a reunirse y a reconocer el tipo de crisis que se había producido; unos meses después, en mayo de 2009, otro maestro de la UACJ es asesinado, Manuel Arroyo. Después de este acontecimiento hubo actos de protesta y una marcha en donde se calcula que asistieron entre 2 mil y 2 500 personas.<sup>10</sup> En junio de 2009 asesinan a uno de los líderes de los comerciantes ambulantes, Géminis Ochoa.

A partir de estos hechos la sociedad civil emprendió varias acciones concretas: un grupo de estudiantes, denominado Asamblea Ciudadana Juarensis, organiza reuniones en los parques de las colonias para que la gente pueda hablar de sus historias con la violencia. Su consigna era: “No a la militarización y fuera el ejército de Ciudad Juárez”. Unos meses después, en octubre de 2010, se organizó un foro en la UACJ, pero al llegar a las instalaciones un estudiante, Darío Álvarez, fue baleado por la policía federal, prácticamente en las puertas de la institución, por donde pasaba un contingente que hacía una marcha pacífica. Todo indica que no fue una bala perdida, pues hubo seis disparos; la universidad, sin embargo, hizo una denuncia por “abuso de autoridad” y no por intento de asesinato. Con este hecho el foro se vino abajo. Este fenómeno muestra que en la ciudad se ha desarrollado una cultura del miedo, paralela a ciertos elementos de lo que se podría denominar como estereotipos de una “cultura del narco”: el asesinato, la droga, la vestimenta y el vocabu-

---

<sup>10</sup> En un video en You Tube puede verse el acto que se realiza en la universidad y la protesta que tiene lugar en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).

lario. Este miedo tiene que ver con la enorme desconfianza ante las autoridades y las instituciones de justicia; porque además de la impunidad se considera que el primer sospechoso de la violencia es la misma víctima, el asesinado.<sup>11</sup>

A partir de la tragedia de Salvárcar, en mayo de 2010 se organizó una serie de reuniones con grupos de la sociedad civil.<sup>12</sup> El resultado de esos encuentros fue un documento que presenta un diagnóstico general de la situación y estrategias solidarias (Álvarez, 2010). En este documento se habla de la ciudad, como un “resumidero de la política podrida”, de la debilidad e impunidad del Estado, de si hay un Estado fallido, de los trabajadores que son considerados como “desechables”, de la crisis del modelo social que da por resultado la crisis de la violencia, de la necesidad de romper la dinámica social para poder construir ciudadanía, pero también del silencio de la Iglesia frente a la crisis.

La caracterización que hacen los académicos de la sociedad de Ciudad Juárez resulta ilustrativa del tipo de contexto que se tiene: se trata de una sociedad joven, fuerte, vigorosa, por lo menos así se pensaba a esta ciudad hace algunos años; pero también una sociedad con un fuerte desarraigo, con un gran ingrediente migratorio. Históricamente ha habido una ausencia del Estado y se ha dejado el desarrollo a la dinámica de la frontera, Estados Unidos y a la maquila, que hizo una “holística social” que da empleo, transporte, educación, alimentación, salud. Este modelo sustituyó a la autoridad y desconectó a los trabajadores de su condición ciudadana y de tener interés en lo público. Tampoco se formó una clase obrera propiamente dicha; por ejemplo, no se registra la formación de un sindicalismo real, sino una ausencia de gremios con representación laboral.

---

<sup>11</sup> Esta información fue recavada de una entrevista con una estudiante y activista social, que trabaja con jóvenes adolescentes en escuelas secundarias. Se ha encontrado que estos grupos han perdido las referencias sobre el futuro y parte del trabajo consiste en ayudarlos a imaginar un futuro posible (estudiante de la UACJ, Ciudad Juárez, 26 de enero de 2011).

<sup>12</sup> Los grupos sociales que participaron fueron: Mesa de Mujeres, Académicos, Iglesia Católica, Pacto por la Cultura, Consejo Ciudadano, Observatorio Juarense para la Seguridad Pública y la Seguridad Social, Comunidades Eclesiales de Base. Cada uno de estos grupos estaba integrado por varias organizaciones.

La crisis de Ciudad Juárez tiene varias dimensiones y una muy importante es que la institucionalidad democrática se encuentra ausente. Hay una grave regresión democrática, sobre todo si los referentes son los movimientos electorales de los años ochenta, cuando Ciudad Juárez fue un bastión en contra del autoritarismo del régimen, con aquellas marchas y protestas contra el fraude de 1986, los mítines que aglutinaban entre 50 y 60 mil personas en una plaza y bloqueaban los puentes internacionales. De aquellos tiempos sólo queda el recuerdo, porque la clase política local es “débil, volátil y electorera”. Para las organizaciones sociales, cualquier intento de construcción democrática pasa por el rescate de los “grandes perdedores” de esta crisis de violencia, de las mujeres y los jóvenes que son los que han puesto los muertos, de los niños que no vislumbran un futuro, de los trabajadores que viven en condiciones cada vez más precarias.

Se sabe que no todo depende de reclamarles a las autoridades que no han hecho su trabajo y que están completamente rebasadas. El hecho es que el Estado está atrapado en la guerra contra el narco y en esta dinámica ha atrapado también a la sociedad. Por eso, los grupos sociales saben que necesitan “fuerzas propias”, crear sujetos con capacidad de decidir, de incidir, de romper la violencia y entrar al conflicto, porque como dice Wieviorka, la violencia es la ausencia de conflicto. Con los planes tipo “Todos somos Juárez”, se sabe que predomina la lógica de la gestión, que el Estado fragmenta al movimiento e impide una visión global del problema. En ese doble atrapamiento del Estado y la sociedad por la guerra, lo que hizo el gobierno federal fue, según algunas organizaciones, repartir “piñatitas y proyectitos”.

También se sabe que dentro de la crisis que vive la ciudad hay mucha confusión, porque ante la carencia de Estado, a veces la sociedad quisiera suplirlo y actuar como si fuera gobierno. Una de los consensos más importantes es la necesidad de encontrar vínculos para formar un amplio movimiento social, que pueda superar la dinámica de las organizaciones y de los organismos llamados intermedios. En diversas entrevistas se ha resaltado el problema de las divisiones internas entre los grupos, pero no

necesariamente por grandes diferencias ideológicas, sino por problemas de personalidades y conflictos entre personas. Por eso se reconoce que a pesar de la crisis y la falta de confianza en las autoridades, el Estado sigue marcando los tiempos y ritmos y la sociedad no ha logrado establecer contrapesos potentes, importantes para equilibrar la dinámica.

Entre los consensos se sabe que lo que puede unir a la sociedad es el rescate de las instituciones de justicia que se encuentran *colapsadas*. Sin embargo, en este punto hay una contradicción entre poner por delante la justicia y el Estado de derecho, como principio de cualquier cambio para salir de la crisis, cuando al mismo tiempo existe una gran desconfianza en las autoridades, lo que lleva, sobre todo a los grupos más radicales, a no querer establecer una interlocución con la autoridad para poder reconstruir las instituciones.

Otro de los consensos importantes es la necesidad de encontrar una suerte de *chispa* que pueda encender la mecha de un movimiento social para construir ese *sujeto* que pueda empezar a cambiar la crisis de violencia, este *pequeño holocausto* que se vive en Ciudad Juárez. Se trata de encontrar una agenda que una y para ello se mencionan múltiples temas en los que trabajan las OSC: desde la política, la agenda legislativa, el *lobby*, la defensa de los derechos humanos, las mujeres, la salud, el desarrollo comunitario, la lucha fiscal, el presupuesto, el municipalismo, la paz, la construcción de ciudadanía. Se trata de encontrar los ejes comunes para lograr una estrategia y conseguir los instrumentos. Este proceso está abierto y apenas ha empezado.

Hay dos ámbitos en donde las OSC han tenido especial participación para cambiar las reglas del juego, pero en ambos casos ha habido importantes fracasos, uno ha sido la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigor hace cuatro años (febrero de 2007) y hoy se considera *inoperante*, pues no ha logrado disminuir los feminicidios, que en muchas ciudades han aumentado. El “Observatorio Nacional del Feminicidio documentó de enero de 2009 a junio de 2010, mil 728 feminicidios en 18 estados”. El estado de Chihuahua es el que se encuentra en primer lugar en la incidencia de este delito, según

datos del INEGI, seguido de Baja California, Guerrero, Durango, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán y Nayarit (*El Universal*, 31/I/2011). Una de las protagonistas de la lucha en contra del feminicidio en Juárez, Marisela Ortiz, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señaló que: “No basta con ver el problema, hay que actuar y dar resultados para que no mueran más mujeres víctimas de violencia en este país” (*El Universal*, 31/I/2011).

El otro ámbito en que la lucha en contra del feminicidio tuvo un éxito importante fue el expediente del “campo algodonerero”, un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió sentencia el 16 de noviembre de 2009.<sup>13</sup> Aquí quedaron en evidencia las deficiencias flagrantes de la administración e impartición de justicia en el estado de Chihuahua. La Corte argumentó lo siguiente:

Cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. La Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos, siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual en los que presentan mayores niveles de impunidad (CIDH, 48).

La actuación del Estado es lamentable, según la sentencia de la Corte se establece que hubo violaciones graves,

irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, retraso en las investigación, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desarrollaron las ejecuciones de las tres víctimas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave (CIDH, 99).

---

<sup>13</sup> El expediente se refiere a la desaparición y muerte de tres mujeres jóvenes: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonerero el 6 de noviembre de 2001, es decir, ocho años antes de la sentencia de la CIDH.

En los puntos resolutivos la Corte declara que “el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal [...] incumplió con su deber de investigar [...] violó el deber de no discriminación” (CIDH, 151 y ss). Por todo lo anterior, la Corte dispuso varias medidas como forma de reparación, remover obstáculos *de jure* o *de facto*, incluir la perspectiva de género, divulgar los resultados; además se fijaron plazos para realizar estas medidas. Las OSC ven esta resolución como un triunfo, pero al mismo tiempo establecen que después de esta sentencia el Estado no ha cumplido con sus obligaciones y no ha habido ningún tipo de reparación. Se sigue asesinando a mujeres y la impunidad no ha disminuido, no hay acciones de la autoridad que muestren que hay cambios en la impartición de justicia. Todo demuestra que aunque haya habido una reforma en el modelo penal, no necesariamente se produce en la práctica un mejor resultado, como veremos con el siguiente caso.

La reforma penal en México ha cambiado recientemente de un modelo inquisitorio hacia el modelo acusatorio (conocido popularmente como el de los juicios orales). Este tipo de cambio se inscribe en una agenda legislativa nacional, lo cual está en sintonía con las demandas de diversas organizaciones sociales nacionales y estatales. Sin embargo, hace poco hubo un caso que fue muy polémico y dejó muy mal parada a la reforma: tres jueces de Chihuahua (Catalina Ochoa, Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib) que juzgaron el caso de la jovencita asesinada Rubí Frayre Escobedo en 2008 dejaron en libertad al supuesto culpable del asesinato, Sergio Barraza, bajo el supuesto de que no había pruebas suficientes y que el expediente estaba mal integrado. Este caso motivó que la madre de Rubí, Maricela Escobedo, emprendiera un movimiento para reclamar justicia y montó un plantón de protesta frente al palacio de gobierno en la capital del estado. Unos días después, el 16 de diciembre de 2010, esta mujer fue asesinada frente a las puertas del palacio de gobierno.

Esta reforma, que se inició en 2006 en el estado de Chihuahua y que poco a poco se implementaría en todo el país, prometía una transformación en el acceso y la impartición de justicia. Pero los planes no salieron

bien, muy pronto la violencia criminal empezó a azotar al estado fronterizo, como ya se ha documentado ampliamente, y ciertas deficiencias del nuevo modelo propiciaron un clima de sospecha sobre la reforma. Sin caer en el simplismo de encontrar una relación de causa-efecto entre juicios orales y el incremento de la violencia y la impunidad, se tiene que diferenciar entre las nuevas reglas y sus problemas de aplicación, y entre el desempeño de los jueces y sus errores, como en el caso de Rubí.

La reforma penal presenta una serie de problemas y huecos en su aplicación. Lo que funciona en otros países, no siempre funciona en México, por lo menos en cuanto a una eficiente impartición de justicia. Por ejemplo, ¿qué sucedió en Chihuahua cuando la Corte decide eliminar la prisión preventiva en casos de presunción de inocencia? 80 por ciento de los casos no se presentaba a las audiencias del tribunal, aunque eran obligatorias (Corral, 2009).

Sobre la legalidad de la prueba, que afecta de forma directa el caso de Rubí, se volvió tan garantista para el inculpado, que dio lugar a lo que estos tres jueces no hicieron, tomar en cuenta una serie de pruebas, declaraciones, indicios, que apuntaban de forma rotunda hacia la culpabilidad de Barraza y que los tres jueces simplemente ignoraron por un rigorismo excesivo y, para mal, con el argumento de haber aplicado los nuevos recursos de una reforma penal fuertemente cuestionada por sus deficientes resultados.

Así, este caso y otros que se han presentado dejan muy mal parada a la reforma, porque contradice todas las bondades que prometía: la criminalidad se ha incrementado de forma exponencial y la impunidad en Chihuahua está en niveles de 98.5 por ciento, porque de los más de 41 mil delitos denunciados en 2008, sólo 658 personas llegaron a la cárcel, 1.5 por ciento (datos publicados en *El Diario* de Ciudad Juárez citado en el estudio de Corral, 2009). De esta forma, casos como el de Rubí y Maricela generan un gran descontento y destruyen una muy disminuida confianza en las instituciones de justicia. El caso de estos tres jueces ha detonado una crisis que sólo las mismas instituciones de justicia pueden resolver. La grave situación de inseguridad, los asesinatos y el incremen-

to de delitos por el crimen organizado ubica en el centro de la agenda pública del país, el acceso, la procuración y la administración de justicia. En cualquier proyecto para el futuro inmediato del país y de Ciudad Juárez, el acceso a la justicia y la transparencia sobre el desempeño de los jueces serán de primera importancia.

La crisis de Juárez ha tenido algunas acciones sociales y pocas expresiones públicas, una de ellas ha sido la lucha del movimiento de los médicos, uno de los gremios más afectados por la violencia y, al mismo tiempo, de los más activos en tener una presencia organizativa y una suerte de empoderamiento. El 22 de octubre de 2010 convocaron a una marcha y lanzaron un pliego petitorio en el que exigían a las autoridades de los tres niveles de gobierno: 1) la asignación de 200 agentes del ministerio público federal para establecer qué tipo de delitos serán de su ámbito de competencia; 2) un sistema de procuración y administración de justicia que funcione y disminuya la impunidad; 3) el saneamiento y profesionalización de la policía municipal; 4) medidas de seguridad para el personal de salud, el “Proyecto Médico Seguro”.<sup>14</sup>

Los días 29 y 30 de enero de 2011, con motivo del primer aniversario de la matanza de Salvárcar, se convocó por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos a una serie de actos que tuvieron como centro una jornada de “ayuno y reflexión ciudadana”.<sup>15</sup> El acto se llevó a cabo en varios espacios. Se inició y concluyó en el Monumento a Juárez, en el centro de Ciudad Juárez, y tuvo una convocatoria amplia, de más de 50 organizaciones civiles y religiosas; también hubo actos en la frontera y en la colonia de Villas de Salvárcar. Se reunieron entre 200 y 300 personas y al inicio una de las madres de las víctimas tocó una campana, era la señora Luz María Dávila (la mujer que le reclamó al presidente Calderón y le dijo que no era bienvenido, que sus hijos no

<sup>14</sup> Del pliego petitorio al que convoca la marcha médico ciudadana del 22 de octubre de 2010 y que firman unas 30 organizaciones, la gran mayoría del gremio médico de Ciudad Juárez. El Proyecto Médico Seguro consiste en pedir el resguardo en los “hospitales de sangre”, públicos y privados, que atienden a los lesionados de bala, de los cuales hay al menos catorce en esa ciudad fronteriza.

<sup>15</sup> Los videos de la jornada están en You Tube: “Conmemorando el Primer Aniversario de la Masacre de Villas de Salvárcar”, en ocho partes.

eran pandilleros como él había dicho en el acto de febrero de 2010) que perdió a sus dos hijos en la matanza.

El sacerdote Óscar Enríquez estableció la posición del acto y dijo:

Ayunamos para actuar y permitir que ante el terror creado en Ciudad Juárez y en el país el pensamiento se aclare e integre el actuar de cada persona hacia el bienestar común [...] Es un acto político que a la par que denuncia propone desde el ejemplo; estamos aquí para reivindicar la memoria de los 16 jóvenes de Villa de Salvárcar, estamos aquí para retomar la exigencia de libertad y de paz ante el agravio a Darío Álvarez, la exigencia de justicia y fin a la impunidad y el feminicidio de Marisela Escobedo y la sensibilidad y creatividad de Susana Chávez, estamos aquí para decir que no hemos olvidado a las mujeres desaparecidas desde 1993 y para exigir que las queremos vivas y con nosotras, para decirles a las y los miles de huérfanos que esta sociedad los acoge y los cuidará (*El Universal*, 30/I/2011).<sup>16</sup>

La lista de agravios es muy clara, aparecen los nombres de los asesinados, los reclamos de paz y de justicia. Una de las participantes que tomó la palabra en el acto expresó en los siguientes términos el sentido de ese acto de primer aniversario:

No queremos más sangre, no queremos más impunidad, no queremos más feminicidios, nos negamos a una vida militarizada. No se puede combatir la violencia con más violencia, mucho menos la ilegalidad con ilegalidad, ni defender la democracia con el autoritarismo. El argumento de que las cosas cambiarán con más ejército y policía en las calles es insostenible; no puede haber reconstrucción sin justicia porque la impunidad seguirá llenando de sangre nuestras calles [...] La única plataforma de reconstrucción que queremos es la justicia (Conmemorando el Primer aniversario de la masacre de Villas de Salvárcar, en You Tube).

<sup>16</sup> Susana Chávez de 36 años fue violada y asesinada en Ciudad Juárez el 10 de enero de 2011. Se trata de una activista que además era poeta, a ella se le atribuye la frase “Ni una muerta más”.

Otra de las actividades fue un acto en la frontera con organizaciones sociales en ambas partes de una valla de alambre que separa la zona de Anapra (Ciudad Juárez) de Sunland Valley (El Paso), con la presencia de más de 50 organizaciones y unas 400 personas (Álvarez Icaza, 2011). Los oradores que tomaron la palabra en inglés, del lado de Estados Unidos, y en español, del lado mexicano, demandaron como punto básico: un basta a la impunidad, por la justicia y que el gobierno “haga su trabajo”. Al cierre del acto, que duró un día y medio, se hizo el recuento de que habían llegado más de 1 800 cartas de solidaridad, de México y de otros países, y se concluyó que el reto inmediato sería establecer un “proceso articulador” para fortalecer a la sociedad y poder exigirle con más fuerza al Estado. La foto del acto que circuló fue la del céntrico monumento a Juárez con cientos de veladoras encendidas que formaban la palabra ¡justicia!

#### REFLEXIONES FINALES

¿Dónde están los sindicatos que pueden negociar mejores condiciones para los trabajadores? ¿Dónde están los ciudadanos y votantes que pueden exigir, castigar y premiar a sus gobernantes? ¿Dónde están las instituciones autónomas que pueden garantizar la defensa de los derechos humanos, la transparencia de la información pública y el arbitraje electoral? ¿Dónde están las organizaciones sociales que hacen contrapesos a las políticas públicas? ¿Dónde está el denso tejido social que puede hacer frente a las estrategias punitivas del Estado y a la delincuencia organizada? ¿Dónde está el capital social, la confianza, los valores, sobre los que se construye el tejido social y se recupera cuando se destruye?

Todas estas preguntas nos llevan a mirar a una sociedad donde el individualismo ha tenido un predominio en la cultura; donde la organización social es de baja intensidad y donde las posibilidades de emprender un amplio movimiento social están limitadas por condiciones estructurales y por la naturaleza propia de la crisis de violencia que produce miedo.

El miedo es, como dice Bauman,

más temible cuando es difuso, disperso, poco claro; cuando flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos; cuando nos rodea sin ton ni son [...] Miedo es el nombre que damos a nuestra incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer —a lo que puede y no puede hacerse— para detenerla en seco, o para combatirla, si pararla es algo que está más allá de nuestro alcance (Bauman, 2007, 10).

Durante el periodo en el que escribí este trabajo la violencia fue una constante. El 5 de febrero de 2011 mataron a tres jóvenes de 15, 16 y 17 años en Ciudad Juárez. Mientras estaban en un negocio de autos, llegaron cuatro hombres armados y preguntaron por el dueño, y al no recibir respuesta, les dispararon. Los tres tenían nacionalidad estadounidense (*El País*, 8/II/2011). Todos los días las noticias reportaron actos de violencia en diversas ciudades del país y, de forma central, en Ciudad Juárez. En ese periodo, que abarca las primeras semanas de 2011, se cumplió el primer aniversario de la masacre de Salvárcar, una matanza, que no ha sido la única de este tipo, que despertó otro nivel de conciencia del problema de la violencia y generó nuevas formas de interlocución entre la sociedad y las autoridades. En suma, las condiciones de Ciudad Juárez no han cambiado desde que Tere Almada escribió, en febrero de 2010, el artículo que ya hemos citado: “Juárez se nos muere de tristeza”.

Juárez es una ciudad en la que su condición fronteriza, el abandono del Estado, la presencia *holística* de la industria maquiladora y la vieja cultura de la ilegalidad han conformado una periferia urbana que atraviesa por uno de sus peores momentos, una crisis de violencia que la destruye de forma cotidiana.

El intento de poner a prueba la hipótesis de participación comunitaria nos llevó a conocer las miradas de las organizaciones sociales. Sin duda, es muy acertado su diagnóstico sobre las condiciones en las que se encuentra la ciudad y las razones por las que ha llegado a ese nivel de

destrucción. La hipótesis de que la ausencia del Estado lleva a la sociedad a la innovación y a la creatividad no se comprueba por ninguna parte.

Lo que encontramos fue una destrucción urbana que ha roto los tejidos sociales. A pesar de ello, hay presencia social; la conciencia de la ciudad palpita en las organizaciones y se tiene un diagnóstico bastante elaborado de lo que sucede en su estructura básica. Al mismo tiempo, existen múltiples mecanismos de intervención con los grupos sociales más vulnerables: se trabaja con jóvenes, con mujeres, con migrantes, con adictos, con niños. En el último año ha habido intentos para establecer vínculos y articulaciones entre los grupos y sus agendas, con el objetivo de encontrar puentes y espacios para lograr una organización más orgánica, que pueda presentar una cara social más definida y fuerte ante los diferentes niveles de gobierno.

Lo que no se ha logrado es que las organizaciones encuentren una chispa que detone un movimiento amplio. Resulta paradójico, pero con lo que ha sucedido en Ciudad Juárez, con los grados de destrucción y el nivel de violencia, quizá se esperaría una presencia más visible de la sociedad organizada, pero parte de la crisis ha sido la desmovilización. Como una hipótesis para nuevas indagaciones, parece que el escalamiento de la violencia ha sido un factor que ha inhibido una participación más amplia y masiva. Ciudad Juárez es una ciudad en donde se agudiza la carencia de organismos intermedios, esos que pueden hacer contrapesos en momentos de crisis. Los diferentes tipos de violencia de los que habla Wieviorka se construyen cotidianamente en Ciudad Juárez. Pero hemos visto de qué forma la violencia como un cálculo de los grupos del crimen opera ante el vacío del Estado; asimismo, la violencia como una recarga de sentido en las redes de jóvenes sicarios, es otra expresión del vacío que dejó el modelo de ciudad.

La regresión democrática se puede mirar en la mezcla de indicadores que nos hablan de cómo se ha vaciado la sociedad juarense, de cómo se ha ido ausentando, desde los migrantes que han regresado a sus lugares de origen, hasta los juarenses que han decidido cruzar la frontera para ir

a vivir en la vecina ciudad texana, El Paso. La calidad de vida en Juárez está tan decaída que la vida nocturna prácticamente ya es inexistente. Es un hecho que la mitad de los restaurantes de la ciudad han cerrado sus puertas. Los votantes han visto que las urnas han perdido el sentido, porque la participación electoral y las alternancias entre PRI y PAN no han servido para construir una mejor ciudad. El nivel de abstención es muy elevado, por encima de los promedios estatales y nacionales. En los comicios locales para elegir alcalde en 2007 sólo participó 27.85 por ciento y tres años después, en 2010, la participación fue de 29.27 por ciento, mientras que el promedio estatal tuvo una participación de 41 por ciento. Así que los juarenses van a las urnas en una proporción de menos de tres por cada diez habitantes. En una ciudad con los altos niveles de violencia y destrucción, el factor electoral se vuelve una alternativa poco atractiva, sobre todo porque unas elecciones democráticas necesitan cierta *normalidad* política, tranquilidad y cierto nivel de garantía de los derechos ciudadanos, condiciones que no se cumplen en este caso.

En 2010, año de las fiestas de la celebración del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia, el 15 de septiembre, en Ciudad Juárez, el alcalde salió al balcón a la ceremonia del *grito*, y se encontró solo frente a los cuerpos policiacos, no había ciudadanos en la plaza. Esto muestra hasta qué punto han desaparecido los espacios públicos.

Las organizaciones de derechos humanos están en la batalla diaria por la defensa de la vida. Mientras terminaba de redactar este texto me llegó un comunicado de seis organizaciones de derechos humanos que, junto con Amnistía Internacional, lanzan una alerta por la desaparición de tres familiares de una defensora de derechos humanos, Josefina Reyes, quien había denunciado abusos militares en Ciudad Juárez y fue asesinada el 3 de enero de 2010. Desde el 7 de febrero pasado los tres familiares se encuentran en calidad de desaparecidos. Al mismo tiempo, la prensa reporta el asesinato de Álvaro Sandoval, una persona al que llamaron “héroe” porque el 23 de enero pasado se defendió de un grupo que asaltó su casa y mató a tres asaltantes. El pasado 9 de febrero fueron asesinados él

y su esposa en su casa en Puerto Palomas, una población cercana a Ciudad Juárez. Así transcurre la vida cotidiana en esta ciudad.<sup>17</sup>

Como parte de su diagnóstico, las organizaciones sociales sostienen el argumento de que el modelo maquilador se ha agotado, pero no existe una propuesta de qué tipo de desarrollo sería conveniente impulsar. Sin embargo, no es responsabilidad de las OSC tener un modelo alternativo o impulsarlo, cuando el país entero está enganchado en la economía de Estados Unidos con un Tratado de Libre Comercio, que desde 1994 marca los tiempos, ritmos y contenidos de la economía del país.

Ciudad Juárez es el resultado del modelo urbano que ha sido impulsado y permitido por los diferentes niveles de gobierno y por las autoridades locales, que durante años han cedido, o se han coludido, con los desarrolladores urbanos y, al final, el resultado ha sido la segregación que existe ahora entre las tres diferentes ciudades (la del norte, primermundista; la del poniente, pobre, y la suroriente, mixta) en donde la mayor parte del territorio tiene pésimos y deficitarios servicios.

La construcción de la violencia se desarrolló de forma exponencial, porque cuando la crisis llegó, ya estaban dadas todas las condiciones urbanas, económicas y sociales, sólo hizo falta la chispa de la estrategia del gobierno federal para incendiar la ciudad. La violencia se ha desparado porque el Estado ha sido incapaz de combatir la ilegalidad, mostrando una impunidad hasta el tope y fuertes lazos de complicidad. En la sociedad juarense hay muchas víctimas inocentes, colaterales o directas, de una guerra que todos los días cobra nuevas vidas, mata, extorsiona, secuestra, en un tobogán que nadie puede detener.

Así, frente a los déficits de un modelo económico que genera empleos precarios, una ciudad donde la autoridad es omisa, con hoyos sociales enormes, llegan los efectos de la violencia entre cárteles que amplifican, escalan el problema y desparraman la violencia. Por lo cual consideramos que la hipótesis alternativa, sobre la débil presencia del

---

<sup>17</sup> Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, COSYDHAC, Mesa de Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas, Movimiento Pacto por la Cultura y Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Estado, más el modelo de ciudad y su condición fronteriza, se comprueba en la construcción de una violencia múltiple que ha destruido a Ciudad Juárez. La innovación y la creatividad no se han producido, o por lo menos, no han logrado ser un contrapeso para modificar visiblemente la situación de violencia.

Las OSC están en la línea de defensa, pero no hay el clima de paz que se necesita para desarrollar opciones creativas, porque por ahora sólo se tiene capacidad para responder a la producción de la violencia. Su posición está más a la defensiva que hacia la construcción de espacios de participación. Entre el miedo y el abandono, la sociedad organizada de Ciudad Juárez pone la cara y el cuerpo para rescatar los derechos humanos, la justicia, los derechos laborales y una democracia que les garantice de forma mínima el rescate de los grupos más vulnerables. Las OSC trabajan todos los días para defender la vida e imaginar un futuro diferente para las mujeres que siguen siendo víctimas del feminicidio, para los jóvenes que son víctimas del crimen y los niños huérfanos que se multiplican ya por miles.

En algún momento Ciudad Juárez posiblemente encontrará de nuevo la forma de disminuir los índices de violencia, de reducir los asesinatos y de recuperar los espacios públicos. Esa es la apuesta de los que se han quedado en esta ciudad, no sólo porque no se pueden ir a vivir al otro lado, sino porque están convencidos de que la reconstrucción de la ciudad sí es posible. ¿Será posible terminar con la pesadilla y empezar a ver que hay partes del gobierno que trabajan por un Estado de derecho para que algún día haya justicia? Mientras tanto, las OSC tendrán que seguir en la defensa de la vida y el cuidado de los más vulnerables, como en cualquier ciudad en donde la guerra sigue todos los días... ☒

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, Rubén y Jorge Castañeda (2009), *El narco: La guerra fallida*, México, Punto de Lectura.
- Almada, Tere (2010), “Juárez se nos muere de tristeza”, disponible en: <http://>

- porjuarezya.blogspot.com/2010/02/juarez-se-nos-muere-de-tristeza.html [consultado el 10 de abril de 2011].
- Álvarez Gándara, Miguel (2010), “Notas de las reuniones sobre diagnóstico, estrategias y articulaciones con instancias solidarias nacionales”, de las reuniones celebradas el 11 y 12 de mayo del 2010 en Ciudad Juárez, Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz.
- Astorga, Luis (2005), *El siglo de las drogas*, México, Plaza y Janés.
- Azaola, Elena (2008), *Crimen, castigo y violencias en México*, Ecuador, Quito, Flacso (Serie Ciudadanía y Violencias).
- Barraza Laurencio (coord.), (2009), *Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervención en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte. El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua*, México.\*
- Castillo Viveros, Nemesio (2009), “Capital social y nivel de cohesión social en Ciudad Juárez”, en Barraza, *Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervención en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua*, México.
- Corral, Luis Antonio (2009), “Sobre la aplicación del nuevo modelo de justicia penal en el estado de Chihuahua”, en Barraza, *Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervención en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua*, México.
- Domínguez Ruvalcaba, Héctor (2010), “Ciudad Juárez: La vida breve”, *Nexos*, 390, junio, México.
- Bauman, Zygmunt (2007), *Miedo líquido: La sociedad contemporánea y sus temores*, Barcelona, Paidós.
- Escalante, Fernando (2011), “Homicidios 2008-2009: La muerte tiene permiso”, *Nexos*, 397, México.
- Flores Pérez, Carlos Antonio (2009), *El Estado en crisis: Crimen organizado y política: Desafíos para la consolidación democrática*, México, CIESAS.

\* Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

- Guerrero, Eduardo (2010), “Cómo reducir la violencia en México”, *Nexos*, 395, noviembre, México.
- \_\_\_\_\_ (2010), “Pandillas y cárteles: La gran alianza”, *Nexos*, 390, junio, México.
- \_\_\_\_\_ (2010), “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, *Nexos*, 362, agosto, México.
- \_\_\_\_\_ (2010), “El reino de las mafias (una guía de lectura)”, *Nexos*, 389, mayo, México.
- Jusidman, Clara y Hugo Almada Mireles (2007), *La realidad social de Ciudad Juárez: Análisis Social*, Ciudad Juárez, UACJ, t. 1.
- Pineda Jaimes, Servando y Luis Alfonso Herrera Robles (2007), “Ciudad Juárez: Las sociedades de riesgo en la frontera norte de México”, *Fermentum, Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 49, mayo-agosto, Mérida, Venezuela.
- Quintana, Víctor (2010), “Modelo Juvenicida”, *La Jornada*, México, 5 de febrero.
- Páez Varela, Alejandro *et al.* (2009), *La guerra por Juárez: El sangriento corazón de la tragedia nacional*, México, Planeta (Temas de Hoy).
- Wieviorka, Michel (2001), “La Violencia: Destrucción y constitución del sujeto”, *Espacio Abierto*, 10 (3), Maracaibo, Venezuela, julio-septiembre.
- \_\_\_\_\_ (2008), “Los problemas sociales de hoy” entrevista en la revista *Sociológica*, 23 (66), pp. 225-232, México, enero-abril.

## DOCUMENTOS

- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009), Caso González y otros (“Campo Algodonero”) *vs.* México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
- Gobierno Federal (2010), “Información sobre el fenómeno delictivo en México”, agosto.
- Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas (UACJ) (2010), Boletín núm. 2, marzo.

Seminario CIDOB (2011), “Periferias urbanas y transformación comunitaria: Diálogo México-Brasil-España”, Barcelona, febrero.

#### HEMEROGRAFÍA

*El País*, México D. F.

*El Universal*, México D. F.

*La Jornada*, México D. F.

*Proceso*, México D. F.

*Reforma*, México D. F.

#### ENTREVISTAS

Víctor Quintana, profesor-investigador de la UACJ, 20 de octubre de 2010 y 26 de enero de 2011.

Eduardo Romero, notario de Ciudad Juárez, 30 de enero de 2011.

Estudiante de la UACJ, 26 de enero de 2011.

Miguel Álvarez, Serapaz, 20 de enero de 2011.

Clara Jusidman, 20 de enero de 2011.